

FUERZAS ECONOMICAS Y ESPERANZAS DEMOCRATICAS

D. Ibarra
2 de julio de 1998

Aunque trate de negarse o disfrazarse, uno de los dilemas vivos del mundo actual expresa con nuevo ropaje la cohabitación tensionada de los dos principios organizativos de la sociedad postmoderna: las lógicas de la democracia y del mercado.

Ambos principios se compaginaron armónicamente en la historia europea, cuando unen fuerzas siglos atrás en la lucha contra el absolutismo. Hoy, en cambio, esa compatibilidad habría que recrearla *ex-profeso*, aprovechando los importantes puntos en que se refuerzan entre sí.

En efecto, la organización del mercado supone la separación recíproca de economía y política —condición favorable al ejercicio democrático—, así como la erección consiguiente de las instituciones de la propiedad privada. Complemento indispensable son las libertades de expresión, asociación y voto, propias de la democracia. A la inversa, esta última, la democracia, resultaría inconcebible o quedaría coja si la fusión de los poderes económico y político, cancelase el juego de formación de consensos de la sociedad civil *vis a vis* el Estado. Según Schlesinger, “la democracia es imposible sin propiedad privada porque ésta —constituida por recursos fuera del alcance del Estado— aporta la única base segura para la oposición política y la libertad intelectual. Sin embargo, el mercado capitalista no es garantía de democracia, como Deng Xiaoping, Lee Kuang Yew, Pinochet y Franco, para no mencionar a Hitler y Mussolini, lo han demostrado ampliamente. La democracia requiere del capitalismo, pero el capitalismo no requiere de la democracia, por lo menos en el corto plazo.”

Han de admitirse fricciones entre la axiología del mercado y la de la democracia. Los valores de la segunda --libertad política, igualdad, justicia social, nacionalismo— buscan abrir e igualar las oportunidades de participación a los ciudadanos; procurar justicia y capilaridad sociales, limar las disparidades distributivas; avanzar en el establecimiento de mínimos de bienestar accesibles a todos los ciudadanos; equiparar en jerarquía los derechos sociales a los derechos económicos o de la propiedad.

La lógica de la democracia insiste en la participación y la igualdad, en la dialéctica de la pluralidad, así como en la formación de acuerdos consensuales sea para definir las orientaciones de la sociedad, resolver controversias de puntos de vista e intereses o proteger las soberanías nacionales. Una vez creados los pesos y contrapesos que segregan lo económico del dominio del Estado, el pensamiento democrático se adhiere más y más al escrutinio abierto de las acciones públicas como garantía del cumplimiento de la voluntad mayoritaria y antídoto de los excesos del poder político o económico.

En contraste, los valores asociados al paradigma del mercado -eficiencia, competitividad, desregulación, cosmopolitismo- siguen otros derroteros. Desde Adam Smith, el pensamiento liberal ha postulado que el juego irrestricto de los intereses individuales es conducente al bienestar común, eleva la eficiencia productiva y es el mejor remedio a los abusos del poder político. La tesis central es que cualquier interferencia con la libertad de los individuos en el intercambio, producirá una asignación subóptima de recursos. Se sostiene por eso que los mercados son eficientes y elevan al máximo la libertad de los individuos. Aquí la justificación es ya no sólo económica, sino también política.

Alcanzar el funcionamiento libre de los mercados, transformar al Estado en espectador de la vida económica, constituye el meollo del sistema que se quiere construir y preservar. Se admiten las desigualdades distributivas, siempre compañeras de los mercados, pero se les justifica en dos planos distintos: sea como la recompensa al talento, dedicación y frugalidad de los ganadores del juego de la competencia, o como el mal necesario para sostener vivos los alicientes a la formación de capital y el ahorro, pilares donde se apoya la posibilidad misma de mejorar a largo plazo la suerte de las poblaciones.

El mercado, se dice, sólo impulsa decisiones sobre el procedimiento a seguir. Y ahí, los individuos por inclinaciones propias las toman y se producen resultados. Por eso, imponer normas de equidad significa nada menos que coartar el principio de la libertad, negar los derechos individuales.

Del mismo modo, las teorías conservadoras postmodernas advierten que junto a las fallas de mercado, suelen producirse fallas de la intervención estatal igual o aún más dañinas. Por ende, según los defensores del mercado, la libertad económica debe reinar suprema sobre todas las libertades y, desde luego, sobre los sentimientos nacionalistas o populistas.

Quiérase o no, mercado y democracia son instituciones dispares que por moverse en sentidos a veces distintos, requieren de reajustes periódicos que les permitan armonizar —no en la lógica, sino mediante arreglos pragmáticos— metas tan disímiles, pero tan necesarias a la convivencia social, como las de premiar la eficiencia mientras se persigue la igualdad. Ceder la plaza pública al mercado puede facilitar el avance en la modernización política formal, pero también supone asumir políticas económicas que no siempre concuerdan con los propósitos igualitarios de la democracia, como lo hemos

constatado amargamente. O, como lo expresa Lechner, “no es lo mismo tener democracia que gobernar democráticamente”.

El nuevo ropaje que viste hoy en día ese viejo dilema entre eficiencia y equidad se expresa en el embate conservador a las redes de seguridad social, a las instituciones del Estado de Bienestar de los países. La cuestión se plantea no tanto en los términos anteriores de subrayar el efecto del gasto social en disipar los alicientes a la inversión o al crecimiento, sino en la exigencia postmoderna de sobrevivir en un mercado universal, tipificado por la libertad de comercio, la multipolaridad de los centros económicos y el renacimiento de ciclos repetitivos de inestabilidad.

En síntesis, toda formulación de una política económica de Estado —seria y de largo plazo— está obligada a servir de puente entre mercado y democracia, esto es, asentarse no en la imposición autoritaria de criterios economicistas, sino en la reconstrucción de los consensos nacionales básicos, rotos por la avalancha ideológica neoliberal. Ello supone, resguardar la estrategia de crecimiento hacia afuera de las tentaciones corto-placistas de bajar inflación manipulando el tipo de cambio a costa de la competitividad de los productores nacionales. Y supone también la implantación y ampliación gradual de derechos sociales exigibles (nutrición, seguro de desempleo, becas educativas) que equilibren sistemáticamente los efectos polarizadores de los mercados liberados. Lo que vale para el grueso de las familias son la estabilidad del ingreso y del trabajo, la salud y el acceso a la educación. Lo que es de fundamental importancia a la economía se relaciona —como afirma Krugman— con la productividad, la distribución del ingreso y el empleo de la fuerza del trabajo.

La eficiencia no es el único bien a perseguir, también lo son la armonía social y la justicia distributiva. Quiérase o no, hay equilibrios sociales, institucionales, estructurales,

políticos que han de perseguirse con algún grado de orden y simultaneidad para ganar el re acceso al crecimiento y suturar las rupturas del tejido social. En esos, y no en otros términos, están planteados los viejos y singularmente los nuevos dilemas del México contemporáneo.